



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)

REFERENCIA:	SENTENCIA
PROCESO:	ORDINARIO LABORAL PRIMERA INSTANCIA
DEMANDANTE:	JUAN GUILLERMO ARANGO OSORIO
DEMANDADO:	COLPENSIONES
LITISCONSORTES	JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA
NECESARIOS:	JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ
RADICADO:	0050013105 020 2015 00659
ACTA N°:	48

La Sala Sexta de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN** y **MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, se constituyó en audiencia pública en el proceso de trámite ordinario laboral de primera instancia promovido por **JUAN GUILLERMO ARANGO OSORIO** en contra de **COLPENSIONES**, siendo vinculados como Litisconsortes Necesarios por Pasiva **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA** y **JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ**¹; para pronunciarse en virtud del recuso de apelación del **DEMANDANTE** y **COLPENSIONES** así como en el grado jurisdiccional de consulta en favor de ésta entidad, frente a la sentencia con la cual el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín finalizó la primera instancia.

La Magistrada del conocimiento, doctora Ana María Zapata Pérez, declaró abierta la audiencia. A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 48** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

¹ Mediante Providencia del **9 de noviembre de 2016** la **JUEZ VEINTE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN** condenó a COLPENSIONES a reconocer y pagar pensión de invalidez a favor del demandante. En esta instancia al verificarse que no estaba debidamente integrada la Litis, con providencia del **03 de julio de 2018 DECLARÓ LA NULIDAD** de la SENTENCIA ordenando la integración del contradictorio con la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA y JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ como LITIS CONSORTES NECESARIOS por pasiva.

1. LA DEMANDA²

Se pretende con este proceso lo siguiente: **i)** DEJAR sin efecto los dictámenes emitidos por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez que calificó al señor **JUAN GUILLERMO ARANGO OSORIO** y se ordene a **COLPENSIONES** a reconocer y pagar la **pensión de invalidez** de origen común por tener una pérdida de capacidad laboral superior al 50% a partir del **3 de septiembre de 2013** y las mesadas adicionales. **ii)** Intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993. **iii)** Indexación y **iv)** Costas.

Para sustentar sus pretensiones afirmó: **i)** En 2007 le realizaron una hemiglosectomía izquierda más vaciamiento de cuello izquierdo que arrojó diagnóstico de cáncer de lengua – clasificación T3. El 03 de enero de 2008 se reporta un carcinoma escamocelular bien diferenciado ulcerado e invasor en la hemilengua izquierda con metástasis, donde se le realiza radioterapia por 25 sesiones hasta 01 de abril de 2008. Ha desencadenado otros padecimientos como lesión de nervio espinal izquierdo, alteración del lenguaje, la deglución y alteración en el hombro izquierdo que lo imposibilita para manejar y trabajar, además de artritis migratoria, con una alta probabilidad de AR Seronegativa y artrosis cervical con uncoartrosis. **ii)** Medicina Laboral del ISS el 28 de octubre de 2009 emite un dictamen en el que determina una PCL del **36.12%** y **FE del 15 de octubre de 2009**. La JRCIA a su turno fijó una PCL del **32.43%** con **FE 28 de octubre de 2009** y el 20 de diciembre de 2010 la JNCI, **confirma** el dictamen de la Junta Regional. **iii)** La Escuela de Salud Pública de la U de A determinó además de los problemas ocasionados por la radioterapia, la Artritis Reumatoidea seronegativa emitiendo dictamen el 13 de noviembre de 2014 en el que se aprecia que la Junta Nacional no tuvo en cuenta la lesión del nervio espinal izquierdo ni la artrosis reumatoidea seronegativa II. **iv)** Reúne todos los requisitos para acceder a la pensión de invalidez en los términos del artículo 1º de la ley 860 de 2003, presentando reclamación administrativa el 12 de febrero de 2015 ante la entidad demandada.

2. DE LAS CONTESTACIONES.

2.1. COLPENSIONES³

En la contestación, la administradora del Régimen de Prima Media se opuso a las pretensiones planteando que: **i)** El demandante fue calificado por la JRCIA con

² Carpeta "01PrimerInstancia" - Archivo PDF titulado "01. 020-2015-00659 Demanda parte 1, págs. 6 a 12"

³ Carpeta "01PrimerInstancia" - Archivo PDF titulado "04. 020-2015-00659 contestación de la demanda parte 1", págs. 04 a 17"

una PCL del 32.43% por lo tanto no es inválido. **ii)** La negativa de la Entidad esté ajustada a derecho, pues reconocer una prestación económica que no corresponda viola el derecho de otros afiliados y pone en peligro el patrimonio de la entidad que es de todos sus afiliados. Propuso excepciones denominadas PRESCRIPCIÓN, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS, IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN DE LAS CONDENAS, PAGO Y COMPENSACIÓN, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, IMPROCEDENCIA INTERESES MORATORIOS.

2.2. JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ ⁴

La entidad manifiesta que se atiene a lo probado en cuanto al dictamen expedido por la Junta Nacional, sin perjuicio de indicar que la decisión emitida por los profesionales de la Entidad se encuentra soportada en los lineamientos del Decreto 1507 de 2014 y en cuanto al procedimiento según Decreto 1072 de 2015, con base en el análisis concienzudo de toda la historia clínica y valoración médica realizada. Propuso como excepciones de mérito las que denominó LEGALIDAD DEL DICTAMEN EXPEDIDO POR LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ: CUMPLIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO, LA VARIACIÓN DE LA CONDICIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE CON POSTERIORIDAD AL DICTAMEN DE LA JUNTA NACIONAL EXIME DE RESPONSABILIDAD A LA ENTIDAD, IMPROCEDENCIA DE LAS PRETENSIONES RESPECTO A LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ: COMPETENCIA DEL JUEZ LABORAL, BUENA FE DE LA PARTE DEMANDADA y LA EXCEPCIÓN GENERICA.

2.3. JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA⁵

Esta entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones señalando que el dictamen emitido se ciñó estrictamente a lo dispuesto en el Manual Único de Calificación de Invalidez con sustento fáctico en los antecedentes médicos y clínicos aportados por la parte demandante, señalando que la incapacidad laboral no alcanza el porcentaje requerido para el estado de invalidez y se realizó el procedimiento indicado en el Decreto 2463 de 2001. Propone como medio defensa las excepciones denominadas LEGALIDAD, EFICACIA Y OBLIGATORIEDAD DEL DICTAMEN y PRESCRIPCIÓN.

3. SENTENCIA

Con providencia del **30 de enero de 2020** la **JUEZ VEINTE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN** tomó las siguientes decisiones⁴: **i)** CONDENÓ a COLPENSIONES a

⁴ Carpeta "01PrimerInstancia" - Archivo PDF titulado "09. 020-2015-00659 Contestaciondemanda parte 2", **págs. 16 a 33"**

⁵ Carpeta "01PrimerInstancia" - Archivo PDF titulado "09. 020-2015-00659 Contestaciondemanda parte 2", **págs. 61 a 66"**

reconocer y pagar la **pensión de invalidez** de origen común a favor de JUAN GUILLERMO ARANGO OSORIO desde el **03 de septiembre del 2013** hasta **diciembre 2016**, retroactivo que equivale con 13 mesadas anuales a **\$28'255.472**, con el salario mínimo legal vigente, al declarar como fecha de **finalización del reconocimiento de la pensión de invalidez** aquella a partir de la cual le fue reconocida la pensión de vejez (31 de diciembre del año 2016). **ii)** ABSOLVIÓ a la JUNTA REGIONAL DE COLIFICACION DE INVALIDEZ y la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ de la totalidad de las pretensiones incoadas en su contra. **iii)** ABSOLVIÓ de los intereses moratorios demandados por el actor, pero en su lugar, CONDENÓ a la **indexación** del retroactivo calculando su valor en la suma de \$2'344.011. **iv)** DECLARÓ no probadas las excepciones de inexistencia de la obligación y prescripción y CONDENÓ en costas solo a COLPENSIONES.

Para proferir estas decisiones razonó de este modo: **i)** Efectuada la valoración del acervo probatorio, encontró acreditada la calidad de inválido del demandante con el dictamen traído con la demanda realizado por la Facultad Nacional de Salud Pública de la U. de A. que fue ratificado y sustentado en Audiencia por la Perito Médica, Dra. Marta Lucia Escobar Pérez, para una PCL del **50,28%** superior a la definida por el ISS y las Juntas de Calificación y con **F de E del 03 de septiembre de 2013**. **ii)** Tras encontrar acreditado el cumplimiento de los requisitos consagrados en el artículo 38 de la ley 100 de 1993 y el 1º de la ley 860 de 2003 y teniendo en cuenta como hecho sobreviniente el reconocimiento de la pensión de vejez a partir del **1º de enero de 2017** de acuerdo con la Resolución SUB 287158 del 31 de octubre de 2018, condenó a un retroactivo entre **el 03 de septiembre de 2013 y diciembre de 2016** ante la incompatibilidad de las dos pensiones, sin encontrar acreditada la prescripción de mesada alguna porque se reclamó el derecho el 12 de febrero de 2015 y presentó la demanda el 08 de mayo siguiente. **iii)** Absolvió de intereses moratorios, pero condenó a indexación sobre el retroactivo reconocido, cuantificando el valor e impuso costas a Colpensiones. **iv)** Absolvió a las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez porque para el momento en que proferieron sus dictámenes no se acreditaban la totalidad de patologías que generaron los resultados definidos en el dictamen realizado por la Facultad Nacional de Salud Pública de la U. de A.

4. DE LOS RECURSOS

4.1. APELACIÓN DEL DEMANDANTE

⁶ Carpeta "01PrimeraInstancia" - Archivo PDF titulado "09. 020-2015-00659 Contestaciondemanda parte 2, **págs. 293 a 296**" y los Archivos MP3 denominados "10. 020-2015-00659 Audiencia fallo" y "11. 020-2015-00659 Recursos de apelación".

La apoderada solicita sea revocada de manera parcial la sentencia en cuanto al no reconocimiento de los intereses moratorios, argumentado que: **i)** Los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 buscan sancionar la conducta pasiva y negligente de la entidad obligada a responder por una prestación de carácter económico. **ii)** Colpensiones, para el 28 de octubre de 2009 en su momento el ISS, calificó al señor Juan Guillermo Arango Osorio, concediéndole una pérdida de la capacidad laboral del **36.12%**, posteriormente el 16 de mayo de 2011, niega nuevamente la solicitud, bajo argumentos que no se ajustan a la realidad ya que todos los dictámenes de calificación se hicieron exclusivamente al estado de salud con base en los padecimientos sufridos como consecuencia de su cáncer, pero en ninguno de ellos hace relación a la enfermedad de artritis o artrosis que fue diagnosticada desde el año 2008. **iii)** Así mismo para el **12 de febrero de 2015** se agotó la reclamación administrativa ante Colpensiones, solicitando el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez acompañando a dicha reclamación la nueva calificación de la Escuela de Salud pública de la U. de A. realizada el 13 de noviembre de 2014, en la cual se calificó al actor con una pérdida de capacidad laboral del **50,28%** con fecha de **estructuración del 3 de septiembre de 2013**, dictamen que no fue tenido en cuenta o fue desconocido por la codemandada para resolver la prestación. **iv)** Advierte una conducta pasiva por Colpensiones desde el inicio de la solicitud de la prestación, considerando así procedente condenar a los intereses moratorios.

4.2. APELACIÓN COLPENSIONES

Solicita la revocatoria de la sentencia insistiendo en lo siguiente: **i)** Han debido tenerse en cuenta los dictámenes que se emitieron por el extinto ISS como por las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, señalando que estas son las entidades encargadas por mandato legal de dictaminar de forma clara, fehaciente y objetiva, el estado de salud de los afiliados. **ii)** En el proceso se otorga validez a un dictamen del que disiente completamente señalando así que no es plausible condenar a la entidad a pagar un retroactivo, máxime porque ya se reconoció la pensión de vejez que se ha venido pagando en debida forma. **iii)** Invoca el Principio Constitucional de la Sostenibilidad Financiera del Sistema, para expresar que no resulta proporcional que la entidad vuelva a pagar otros rubros

5. TRÁMITE, COMPETENCIA Y DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA

Habiéndose corrido traslado para formular alegatos de conclusión en esta instancia⁷, intervino la apoderada de **COLPENSIONES**⁸ solicitando la **revocatoria de la sentencia**, reiterando los planteamientos del recurso, así: **i)** Si bien el actor cuenta con más de 1.200 semanas no alcanza la calificación exigida para la pensión de invalidez, pues el ISS lo calificó con el 36,12% y la Junta Regional de Calificación de Invalidez le otorgó el 32,43% calificación que se encuentra en firme. **ii)** La Escuela de Salud Pública de la Universidad de Antioquia lo calificó con el 50,28% de PCL, sin ser este ente autorizado por ley, por lo cual no cuenta con uno de los requisitos para alcanzar el status de pensionado por invalidez, citando el artículo 41 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 52 de la ley 962 de 2005. **iii)** No puede condenarse a la indexación ni a costas, por cuanto la Entidad no ha desconocido la ley y por ello debe absolverse.

Pues bien, la Sala es competente para conocer del proceso por las materias objeto del recurso de apelación interpuesto por el DEMANDANTE y COLPENSIONES y en grado jurisdiccional de CONSULTA, por lo que se impone abordar como problemas jurídicos: **i)** Si la única prueba idónea para determinar el estado de invalidez y su fecha de estructuración es el dictamen de las Juntas de calificación o es admisible un dictamen pericial diferente. **ii)** A partir de ello, se verificará en el caso concreto si se acreditó en el proceso que el demandante cumple con los requisitos para acceder a la pensión de invalidez y la procedencia de la condena al pago del retroactivo causado hasta la fecha en que se efectuó el reconocimiento de pensión de vejez. **iii)** Como condenas accesorias, se analizará si son procedentes o no los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 sobre la condena al retroactivo de mesadas pensionales por invalidez o la indexación de tales valores.

6. CALIFICACIÓN DE PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL – UN TRÁMITE DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA ENTRE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA (AFP – ARL) Y LAS JUNTAS DE CALIFICACION DE INVALIDEZ SIN QUE SE CONSTITUYAN COMO PRUEBA SOLEMNE

Se ha consagrado en nuestro ordenamiento jurídico y a partir de la expedición de la Ley 100 de 1993 el trámite de **calificación de la pérdida de capacidad laboral**, determinante para establecer si una persona tiene derecho al reconocimiento de aquellas prestaciones económicas derivadas de disminución de la pérdida de capacidad laboral. Si se trata de una pérdida de capacidad

⁷ Carpeta nombrada "02SegundaInstancia" Archivo PDF titulado "01. 020 2015 00659 Auto admite y corre traslado"

⁸ Carpeta nombrada "02SegundaInstancia" Archivo PDF titulado "02. 020 2015 00659 alegatos COLPENSIONES"

laboral superior al 50% de **origen común**, la persona se considera inválida⁹ y eventualmente podrá al reconocimiento de una pensión de invalidez a cargo del Sistema General de Pensiones.

Ahora bien, respecto de las entidades encargadas de calificar la pérdida de capacidad laboral en los términos descritos, **el artículo 41 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 142 del Decreto 19 de 2012**, dispone que corresponde a COLPENSIONES, a las Administradoras de Riesgos Laborales - ARL-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación, debe manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad debe remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Se señala expresamente en la norma, que **“contra dichas decisiones proceden las acciones legales”**.

Estas entidades, **deben efectuar la calificación** con base en el Manual Único para la Calificación de Invalidez vigente a la fecha de calificación, que es expedido por el Gobierno Nacional y contempla los criterios técnicos de evaluación para calificar la imposibilidad que tenga el afectado para desempeñar su trabajo por pérdida de su capacidad laboral¹⁰, observando criterios éticos, científicos y de oportunidad, con el fin de garantizar el acceso a los derechos que tienen las personas afiliadas a la seguridad social¹¹.

Ahora, no existe duda alguna que los dictámenes proferidos por las entidades habilitadas para calificar la pérdida de la capacidad laboral de los afiliados al sistema de Seguridad Social con sustento en las normas especiales que lo regulan, son susceptibles de ser enjuiciados ante la justicia ordinaria laboral, de tal manera que, los criterios científicos allí plasmados no son vinculantes para el juez que conoce una controversia relativa a la causación de una prestación económica que se origine en alguna de estas contingencias¹².

⁹ **ARTÍCULO 38 Ley 100. ESTADO DE INVALIDEZ.** Para los efectos del presente capítulo se considera *inválida* la persona que, por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.

¹⁰ Decreto 917 de 1999 y Decreto 1507 de 2014

¹¹ **T 257 de 2019**

¹² **SL 16374-2015- SL5157-2020 – SL 4611- 2020- SL 5694-2021 – SL 1420-2022**

En efecto, si bien los artículos 9º de la Ley 776 de 2002, 142 del Decreto 19 de 2012 -que modificó el 142 de la Ley 100 de 1993-, y 18 de la Ley 1562 de 2012, fijaron un procedimiento especial para establecer la pérdida de capacidad laboral de una persona y otorgaron competencia a las juntas de calificación de invalidez, para que, con apego en los criterios de orden técnico y científico contenidos en el *Manual Único de Calificación de Invalidez*, emitieran la prueba idónea tendiente a demostrar tal condición; lo anterior no quiere decir que se le haya provisto a estos dictámenes la condición de prueba solemne o *ad substantiam actus*, pues los jueces están legitimados, con fundamento en el **artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social**, para sopesar o darle mayor valor a otras pruebas que hubieran sido aportadas en debida forma al proceso y, con base en ellas, forjar su convencimiento sobre la realidad fáctica que se discute¹³.

Pero, resulta evidente que, si se pretende cuestionar su contenido y validez, deben acreditarse en el proceso las falencias, habiéndose razonado en la reciente providencia **SL 1041- 2022** del siguiente modo:

“Importa precisar que el juez laboral no puede ignorar las circunstancias particulares del asunto en cuestión, ni los elementos probatorios adosados, dado que en su integralidad *«permiten determinar el momento en el que se produce de manera definitiva, la disminución de la capacidad laboral de la persona»* (CSJ **SL4346-2020**).

Ahora bien, no se desconoce que el juzgador del trabajo está obligado a apoyar su decisión en los dictámenes obrantes en el proceso, con observancia de su contenido informativo y técnico; sin embargo, estos no constituyen prueba definitiva e incuestionable en el marco del proceso ordinario, por manera que el Tribunal en uso de sus facultades de libre apreciación de la prueba, es quien estaba llamado a definir, tal cual lo hizo, el estado de invalidez del promotor del litigio.

Al respecto, el proveído CSJ **SL3992-2019**, discurrió:

Para esos fines, el juez cuenta con amplias potestades probatorias y de reconstrucción de la verdad real del proceso, de manera tal que puede darle credibilidad plena al dictamen o someterlo a un examen crítico integral o de alguno de sus elementos, hasta el punto de apartarse legítimamente de sus valoraciones y conclusiones.

Específicamente, en tratándose de la valoración de la pérdida de la capacidad laboral de los afiliados al sistema de seguridad social y de la fecha de estructuración de tal evento, la Corte ha sostenido que los dictámenes de las juntas de calificación, a pesar de su importancia, no representan conceptos definitivos e inmutables, sino pruebas del proceso que bien pueden ser revaluadas o desvirtuadas por el juez del trabajo, en ejercicio de sus libertades de valoración probatoria. (Subrayas fuera de texto).

¹³ SL del 18 septiembre 2012, radicación 35450, **SL 9184-2016, SL 21693-2017, SL 4611- 2020**

Recabando en la libertad de valoración probatoria y de formación de convencimiento en providencias como la **SL 877 – 2020** reiterada en la **SL 5694-2021**, en las que con claridad se expresó:

«[...] en estricto rigor y para efectos de la valoración probatoria que ha de realizar el juzgador dentro de la actuación pertinente no están sometidos a la jerarquización propia de los procedimientos administrativos. No se olvide que, de conformidad con la Constitución y la Ley, son los jueces laborales, y no los peritos, quienes tienen facultad para dirimir esa clase de diferendos de la seguridad social con el carácter de cosa juzgada. [...]

De la postura referida se infiere que el dictamen de las Juntas de Calificación de Invalidez, son algunos de los medios de prueba, no solemnes (sentencia SL 4571-2019) con los cuales se puede acreditar el grado de la pérdida de capacidad laboral, su origen y fecha de estructuración, teniendo el juez la potestad de apreciar libremente la prueba»

6. CASO CONCRETO

Sea lo primero señalar, que la pretensión principal de la demanda va dirigida a dos aspectos diferentes: **i)** De un lado, que se dejen sin efectos los dictámenes de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. **ii)** Por otro lado, que se DECLARE que el señor JUAN GUILLERMO ARANGO OSORIO tiene una PCL del 50.28% con fecha de estructuración del 3 de septiembre de 2013 de conformidad con el nuevo dictamen aportado con la demanda, y a partir de ello, se CONDENE a COLPENSIONES a reconocer PENSIÓN DE INVALIDEZ.

Tras efectuar la valoración del acervo probatorio, la Juez arribó a dos conclusiones básicas: **i)** En primer lugar, acogió íntegramente el dictamen de pérdida de capacidad laboral aportado como prueba pericial con la demanda, efectuado el 13 de enero de 2017 por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia que determinó una **PCL del 50,28% de origen común** y determinó como **fecha de estructuración del estado de invalidez, el 3 de septiembre de 2013**. Para ello, valoró el contenido de tal experticia, así como la sustentación dada por la Médico Martha Lucía Escobar Pérez quien explicó que el paciente tuvo aumento en el porcentaje dado a la limitación de ángulos de movimiento articular de hombro izquierdo por cuanto al haberle realizado una cirugía le quitaron los focos de metástasis de cuello y **hubo una lesión importante en el nervio espinal** que era el que le daba la posibilidad de tener una buena movilidad de los músculos del hombro, además que para el **03 de septiembre de 2013 ART MÉDICA confirma diagnóstico de artritis reumatoide seronegativa**, lo que conllevó a que en este dictamen se estableciera una **PCL** del 50,28%, origen **común** y **FE 3 de septiembre de 2013**. **ii)** Encontró acreditado el cumplimiento de

los requisitos consagrados en los artículos 38 y 39 de la Ley 100, este último modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003.

La Sala comparte el análisis y decisión adoptada en la providencia que se revisa, debiendo destacar además que, de acuerdo con lo previsto en el artículo **167** del **CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO**, disposición normativa en la que se consagra una de las principales cargas procesales cuando se acude a la administración de justicia, referida a la prueba de los hechos que se alegan y se conoce como principio “**onus probandi**” y a partir del análisis efectuado en el **acápito 5** de esta sentencia, y efectuada la valoración del acervo probatorio a la luz de lo previsto en el **artículo 61 del Código Procesal del Trabajo**, en este caso la parte demandante **no cumplió con la carga de probar que las accionadas hubiesen incurrido en errores** al momento de efectuar la valoración de la Pérdida de Capacidad Laboral del señor ARANGO OSORIO, pero **si cumplió** con la de probar el estado de invalidez, contingencia protegida por el sistema general de pensiones con el reconocimiento de una pensión si se acredita la densidad de semanas establecida en la Ley.

- En efecto, se observa que el **ISS** hoy **COLPENSIONES** emite Dictamen el 28 de octubre de 2009 a través de la Gerencia Nacional de Atención al Pensionado – Comisión Médico Laboral, determinando en primera oportunidad una Pérdida de la Capacidad Laboral de **36.12 %**, origen **común** y Fecha de Estructuración **15 de octubre de 2009** según los criterios establecidos en el Manual único para la Calificación de la Invalidez adoptado por el **Decreto 917 de 1999**¹⁴. En él se tuvieron en cuenta dos deficiencias: **Capítulo V, Tabla 5.1** Deficiencia por Hemiglosectomía izquierda; **Capítulo XI, Tabla 11,6** (TRASTORNO DEGLUSIÓN Y FONAT) Deficiencia por Lesión Nervio Espinal Izquierdo - Alteración del lenguaje y deglución y **Tabla 1,17, 1,19 y 1,21** Deficiencia alteración AMA hombro izquierdo, generando como **CÁLCULO FINAL DE LA DEFICIENCIA PONDERADA 21.17%**, con sumatoria de las discapacidades arrojó **2,70%** y de las minusvalías **12,25%**.
- La **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA** mediante dictamen N° 31100 de fecha 19/02/2010¹⁵ tuvo en cuenta las mismas deficiencias: **Tabla 1,17, 1,19, 1,48, 1.0** Deficiencia restricción de AMAS de hombro izquierdo; **Tabla 5.1** Deficiencia por Amputación parcial de la lengua;

¹⁴ Carpeta “01PrimeralInstancia” - Archivo PDF titulado “01. 020-2015-00659 Demanda parte 1, **págs. 23 a 24**”

¹⁵ Carpeta “01PrimeralInstancia” - Archivo PDF titulado “01. 020-2015-00659 Demanda parte 1, **págs. 28 a 31** y la sustentación **págs. 26 a 27**”

Tabla 13,8 Clase III Deficiencia por alteración del habla y **Tabla 11,6** Deficiencia por Alteración en la velocidad de deglución, que generó como CÁLCULO FINAL DE LA DEFICIENCIA PONDERADA 16,83%, con sumatoria de las discapacidades arrojó 2,60% y de las minusvalías 13,00%.

- Y la **JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ** mediante dictamen N° 3517601 de fecha 20/12/2010¹⁶ se tuvieron en cuenta las mismas deficiencias: **Tabla 1,17, 1,19, 1,48** Deficiencia restricción de AMAS de hombro izquierdo; **Tabla 5.1** Deficiencia por Amputación parcial de la lengua; **Tabla 13,8 Clase III** Deficiencia por alteración del habla y **Tabla 11,6** Deficiencia por Alteración en la velocidad de deglución, que generó como CÁLCULO FINAL DE LA DEFICIENCIA PONDERADA 16,83%, con sumatoria de las discapacidades arrojó 2,60% y de las minusvalías 13,00%.
- Y se allegó con la demanda el dictamen de la **FACULTAD DE SALUD PÚBLICA – UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA** emitido el 13 de noviembre de 2014¹⁷ por la Médico Especialista en Salud Ocupacional MARTHA LUCÍA ESCOBAR PÉREZ que reporta una **PCL** del 50.28%.

En esta experticia se incluye nueva deficiencia y aumento en el porcentaje de la deficiencia de: "Limitación ángulos de movimiento articular hombro izquierdo" así:

- Deficiencia **artrosis reumatoidea seronegativa Clase III** Tabla 3.1 **(17,4%)**
- Limitación ángulos de movimiento articular hombro izquierdo, **Tabla 1,17, 1,19, 1,21, 1.0 (17,4%)**

Obtuvo como valor total de deficiencia 27.28%. La valoración con sumatoria de las discapacidades arrojó 6,00% y de las minusvalías 17,00%.

Pues bien, efectuando la valoración de la **HISTORIA CLÍNICA**¹⁸, de los conceptos emitidos en los diferentes dictámenes efectuados por las codemandadas así como del practicado por la perito médica, Dra. MARTHA LUCÍA ESCOBAR PÉREZ,

¹⁶ Carpeta "01PrimerInstancia" - Archivo PDF titulado "01. 020-2015-00659 Demanda parte 1, págs. 39 a 42 y la sustentación págs. 36 a 38"

¹⁷ Carpeta "01PrimerInstancia" - Archivo PDF titulado "01. 020-2015-00659 Demanda parte 1, págs. 39 a 42"

¹⁸ Carpeta "01PrimerInstancia" - Archivo PDF titulado "01. 020-2015-00659 Demanda parte 1, -cáncer págs. 57 a 142-, -oftalmológica págs. 143 a 181-, -odontológica págs. 182 a 196, -reumatología págs. 202 a 288"; Archivo PDF rotulado "02.020-2015-00659 Demanda Parte 2 -reumatología págs. 01 a 02-, -ortopedia págs. 03 a 58-, -Fonoaudiología y Neuropsicología págs. 60 a 67" y Archivo PDF llamado "09. 020-2015-00659 Contestaciondemanda parte 2, págs. 74 a 107"

la Sala llega al convencimiento que el señor JUAN GUILLERMO ARANGO OSORIO tiene una pérdida de capacidad laboral mayor al 50% a partir de una **valoración integral** a la luz de lo previsto en la sentencia **C 425 del 2005**, al tener en cuenta los padecimientos de AMPUTACIÓN PARCIAL DE LA LENGUA, LESIÓN TOTAL DEL NERVIO ESPINAL IZQUIERDO (DEGLUSIÓN 10% - HABLA 10%), LIMITACIÓN ÁNGULOS DE MOVIMIENTO ARTICULAR HOMBRO IZQUIERDO y ARTROSIS REUMATOIDEA SERONEGATIVA CLASE II, última de las **patologías** que se avizora en la Historia Clínica¹⁹ y que todas ellas fueron incluidas en el dictamen emitido por la Facultad Nacional de Salud Pública – Universidad de Antioquia; haciendo la salvedad que los diagnósticos por oftalmología²⁰: * Presencia de lentes intraoculares, * Otros trastornos del cuerpo vítreo, * Trastorno del ojo y sus anexos, * infarto agudo al miocardio y la presencia del lente intraocular según valoración del 10 de octubre de 2014 (un mes antes de la elaboración del dictamen por Facultad de Salud Pública – U. de A.-) no tienen porcentaje ya que no ocasionan daño ni pérdida de capacidad laboral, según aquella valoración.

De manera que, lo que marca la diferencia entre las experticias está en la valoración respecto al agravamiento de la deficiencia LIMITACIÓN ÁNGULOS DE MOVIMIENTO ARTICULAR HOMBRO IZQUIERDO, así como la inclusión de la ARTROSIS REUMATOIDEA SERONEGATIVA CLASE II confirmada por ART MÉDICA el **03 de septiembre de 2013**, constituyéndose en la **F de E** establecida para la **PCL** del **50,28%** del señor ARANGO OSORIO, diferentes a las emitidas por el extinto ISS (PCL 36,12% y FE 15/10/09) y por las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez (PCL 32,43% y FE 28/10/09).

Y la doctora **Marta Lucia Escobar Pérez**, perito del proceso al ratificar el dictamen por ella emitido el 13 de noviembre de 2014, explicó con claridad como para el año 2013 se agrega una patología importante que es la **artritis cero negativa** que fue definida por reumatología, relevante no solo porque al sumar el valor asignado en el Manual de Calificación conlleva a una PCL superior al 50% sino que permite definir la fecha de estructuración (**03 de septiembre de 2013**), que es en la que se confirma el diagnóstico de esta patología crónica, La perito es enfática al señalar que la valoración realizada por las Juntas en su momento (año 2010) estuvo bien realizada a partir del diagnóstico de **cáncer de lengua que esta** incluso activo para esa fecha, pero que es para el momento en que ella realiza la calificación -4 años después- cuando se incluyen las nuevas

¹⁹ Carpeta "01PrimerInstancia" - Archivo PDF titulado "01. 020-2015-00659 Demanda parte 1, -reumatología pág. 247"

²⁰ Carpeta "01PrimerInstancia" - Archivo PDF titulado "01Expediente002201700967", **pág. 146"**

patologías agregadas y complejas que hacen que su PCL aumente. Explica que la **limitación de ángulo de movimiento articular de hombro izquierdo** también es consecuencia del cáncer porque al demandante le realizaron cirugía para quitar los focos de metástasis de cuello y hubo una lesión importante en el nervio espinal que es el que posibilita la movilidad de los músculos del hombro, daño que había aumentado para el momento en que ella realizó la experticia, encontrando mayor limitación. Y expresa además respecto al nuevo diagnóstico de Artrosis reumatoidea, que si bien en el año 2008 el Médico tenía la sospecha solo se confirmó en el año 2013 la artritis migratoria, que es “cuando una persona presenta dolor articular, inflamación, algunas veces enrojecimiento, migratoria es que aparece en un codo, dos o tres días en una rodilla, empieza a migrar. Son diagnósticos difíciles que requieren pruebas para llegar al Diagnóstico al paciente solo se le confirma en 2013”.

Es el conjunto de consideraciones precedente a partir de lo analizado *in extenso* en el **acápito 5** de esta providencia, que lleva a esta corporación a definir en este caso que la determinación de la pérdida de capacidad laboral proviene del conjunto del acervo probatorio, de la historia clínica actualizada y que tuvo en cuenta la perito médica MARTHA LUCÍA ESCOBAR PÉREZ a partir de los criterios definidos en el MANUAL ÚNICO DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ aplicable al actor, Decreto 917 de 1999.

Así, contrario a lo planteado por la apoderada de COLPENSIONES respecto a la validez única y exclusiva a los dictámenes emitidos por las entidades discriminadas en el artículo 41 de la ley 100 de 1993, esta corporación no puede ignorar las circunstancias particulares del caso ni los elementos probatorios adosados, y si bien resulta imperioso analizar los dictámenes obrantes en el proceso con observancia de su contenido informativo y técnico; sin embargo, estos no constituyen prueba definitiva e incuestionable. Se concluye así en virtud de la libre apreciación de la prueba el estado de invalidez del promotor de este litigio, con una **PCL del 54.35% (SL3992-2019, SL 877 – 2020, SL 5694- 2021, SL 1041- 2022 – SL 1420 - 2022)**

Igualmente, en cuanto a la **Fecha de Estructuración** la Sala comparte en la declaratoria que esta es el **3 de septiembre de 2013**, porque se apoya en la Historia Clínica y resulta coherente con la fecha en la que ART MÉDICA **confirma** el diagnóstico de **artritis reumatoide seronegativa (M060)** suscrito por el Médico

Reumatólogo Dr. Jimi Mejía Vallejo²¹; siendo claro que cuando ello ocurre y se presentan enfermedades que se desarrollan con posterioridad a la emisión de los dictámenes iniciales, el Juez debe establecer la data que corresponde, máxime cuando de la misma depende el reconocimiento de un derecho pensional fundamental e irrenunciable (**SL1041-2022**)

Ya en relación con el requisito de semanas, revisada la **Historia Laboral**²² del demandante por la Sala encuentra que entre el 03 de septiembre de 2010 al 03 de septiembre de 2013, cuenta con 1.290 días equivalente a **184,28 semanas**, cumpliendo con creces las 50 semanas dentro de los 3 años inmediatamente a la fecha de estructuración de su invalidez, densidad mínima exigida en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003.

Y en relación con los extremos temporales del retroactivo objeto de condena, se ha acreditado en el plenario que con **Resolución SUB 287158** del 31 de octubre de 2018 se **reconoció la pensión de vejez** al señor JUAN GUILLERMO ARGANGO OSORIO **a partir del 1º de enero de 2017**. Por consiguiente, de conformidad con lo definido en el inciso final del **artículo 40 de la Ley 100** en el que se dispone que “La pensión de *invalidez* se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado” y a partir de la incompatibilidad entre estas dos prestaciones económicas (**artículo 13 literal j) de la Ley 100**), resulta ajustada a derecho la decisión de **reconocer la pensión de invalidez** desde la **F de E - 03 de septiembre de 2013-** hasta el 31 de diciembre de 2016, día anterior al reconocimiento de la prestación de vejez.

Es el conjunto de consideraciones precedente el que lleva a la Sala a **CONFIRMAR** la providencia de primera instancia en cuanto al reconocimiento de la **pensión de invalidez** a cargo de COLPENSIONES y en favor del señor JUAN GUILLERMO ARANGO OSORIO entre el **3 de septiembre de 2013 al 31 de diciembre de 2016**, teniendo como mesada pensional un (1) smmlv y con 13 mesadas anuales por haberse causado con posterioridad al 31 de julio de 2011 según lo dispuesto en el AL 01 de 2005, el que asciende a la suma de **VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$28´255.472)** conforme el siguiente detalle:

²¹ Carpeta “01PrimerInstancia” - Archivo PDF titulado “01. 020-2015-00659 Demanda parte 1, -reumatología pág. 247”

²² Carpeta “01PrimerInstancia” - Archivo PDF titulado “01Expediente002201700967”, **págs. 13 a 18**

RETROACTIVO PENSIONAL RDO. 020 2015 00659				
Año	IPC	# mesadas	Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2013	1,94%	4,933	\$ 589.500	\$ 2.908.020
2014	3,66%	13	\$ 616.000	\$ 8.008.000
2015	6,77%	13	\$ 644.350	\$ 8.376.550
2016	5,75%	13	\$ 689.454	\$ 8.962.902
TOTAL				\$ 28.255.472

COLPENSIONES descontará del valor del retroactivo los aportes en salud, el que opera por mandato legal y **sin necesidad de declaración judicial**, como lo ha expuesto la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como la **SL 1169 de 2019 – Rad 64.490 del 10 de abril** y la **SL1019-2020 del 12 de febrero**. En este aspecto se ADICIONARÁ la providencia que se revisa, que nada dispuso sobre el particular.

Se propuso por la demandada la excepción de PRESCRIPCIÓN, pero siendo claro que la primera mesada corresponde al mes de **septiembre de 2013** y como la demanda con la que se pretende el reconocimiento de la pensión de invalidez fue instaurada desde el **8 de mayo de 2015**²³, en este caso **no ha prescrito mesada pensional alguna**.

7. INTERESES MORATORIOS Y/O INDEXACIÓN

La parte demandante apela en cuanto a la absolución impartida por este concepto, pero la Sala no comparte su planteamiento, por lo siguiente. La Jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema ha sido pacífica y reitera la doctrina referida a que los intereses moratorios se generan por **el retardo en el pago de las mesadas pensionales**, sin que para ello resulte menester evaluar las circunstancias por las que el derecho pensional se encontraba en discusión o el actuar de las entidades encargadas del reconocimiento y pago del derecho pensional. Este criterio se ha plasmado en sentencias como la **SL2941-2016**.

Pero no puede perderse de vista que esa misma Corporación ha consolidado su precedente en sentencias como la **SL16390-2015, SL552-2018 y SL1019-2020 del 12 de febrero**, referido a unos casos precisos y excepcionales en los que no resulta procedente la condena a estos intereses, circunscribiéndose a aquellos eventos la administradora de pensiones negó el derecho con apego minucioso a la ley vigente aplicable al caso concreto o cuando el reconocimiento de la prestación en el proceso obedece a un cambio de criterio jurisprudencial que

²³ Carpeta “01PrimerInstancia” - Archivo PDF titulado “01. 020-2015-00659 Demanda parte 1, **pág. 12**”

dicha entidad no podía prever, sin que pueda advertirse un actuar arbitrario o caprichoso.

En este caso concreto, la condena a intereses moratorios **no es procedente**, porque para el momento en que se reclama el derecho pensional por vía administrativa, no se había acreditado la calidad de inválido del actor. Las entidades encargadas de efectuar la valoración de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico habían definido una PCL inferior al 50%, de modo que no se acreditaba plenamente por el hoy demandante el requisito consagrado en el artículo 38 de la Ley 100. De hecho, lo que se ha demostrado en el plenario a partir de la declaración de la médica especialista en salud ocupacional Marta Lucia Escobar Pérez, es que para el momento en que las Juntas realizaron la valoración en el año 2010 no se habían consolidado todas las deficiencias que fueron incluidas por la perito varios años después y que fueron las que llevaron a concluir la calidad de inválido del actor con una fecha de estructuración del 03 de septiembre de 2013, claramente posterior a aquella en la que el demandante fuera valorado por las entidades calificadoras. Así, siendo claro que es con ocasión de este proceso que se concluye el derecho a la prestación, en manera alguna se presentan los presupuestos consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

En cuanto a la **condena** por la **indexación** del retroactivo pensional reconocido, también se **CONFIRMA** en este aspecto la providencia porque las mesadas reconocidas y no pagadas en su oportunidad legal se encuentran afectadas por la devaluación de la moneda, derivada de una economía inflacionaria como la nuestra, siendo claro que esta condena no implica el incremento del valor del crédito, ya que su función consiste únicamente en evitar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y la consecuente reducción del patrimonio de quien accede a la administración de justicia, causada por el transcurso del tiempo. Tampoco puede verse como una sanción, ya que lejos de castigar al deudor, lo que garantiza es que éste crédito no pierda su valor real. Así, se impone proferir una condena que ponga al demandante en la situación más cercana al supuesto en que se hallaría de no haberse producido el menoscabo, tal como lo dispone el **artículo 16 de la Ley 446 de 1998** según el cual *«dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales»*. Y la forma en

que aquello se garantiza en el marco de la protección especial de los derechos laborales y de la seguridad social, es a través de la indexación como consecuencia de la incontenible depreciación de la moneda (**SL 359 -2021**).

Pero se **MODIFICA** porque se ordenará a COLPENSIONES calcularla de acuerdo con la siguiente fórmula y criterios **al momento del pago de la obligación**:

$$\frac{\text{ÍNDICE FINAL} \times \text{VALOR A INDEXAR}}{\text{ÍNDICE INICIAL}} - \text{VALOR A INDEXAR} = \text{VALOR INDEXACIÓN}$$

Los valores con los que ha de remplazarse la fórmula deben ser:

ÍNDICE FINAL correspondiente al IPC para la **fecha en que haya de efectuarse el pago**

ÍNDICE INICIAL correspondiente al IPC para vigente **a la fecha en que debió efectuarse el pago de cada mesada**

VALOR A INDEXAR que se refiere al **monto de cada mensualidad**

Como ninguno de los recursos de apelación sale avante, no se causan costas en esta instancia (artículo 365 numeral 8 del CGP)

8. LA DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por la Juez Veinte Laboral del Circuito de Medellín, pero se **MODIFICA** el numeral **QUINTO**, porque será COLPENSIONES quien calcule el valor de la **INDEXACIÓN** sobre cada una de las mesadas que integra retroactivo objeto de condena, lo que realizará al momento del pago de la obligación de acuerdo con la fórmula y criterios definidos en la parte motiva.

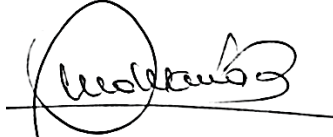
Y se **ADICIONA** la sentencia, porque **COLPENSIONES** descontará del valor del retroactivo pensional objeto de condena (**\$28'255.472**) los aportes en salud que remitirá a la EPS, en los términos de esta providencia.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia

Lo anterior se notifica por **EDICTO**, vencido el término de notificación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Se da por terminada la audiencia y se firma en constancia por quien en ella intervinieron.

Los Magistrados,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



RADICADO: 050013105 – 020-2015-00659-01

SENTENCIA del //28/07/2022

Con este código puede acceder a la actuación de segunda instancia,
para ello debe tener una cuenta de Microsoft.

Enlace en caso de no tener lector QR: https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des06sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/EjGehtcNObxMqPrRuQT-OplBdUDBeL6uf2gdbCvJ8ZKWsg?e=peIKEb